

Territorio, narcotráfico y guerra en el Amazonas colombiano

Territory, drug trafficking and war in the colombian amazon

Publicación: 20 de enero de 2025

Oscar Useche-Aldana¹

Recibimiento: 30 de noviembre de 2024

Aceptación: 29 de diciembre de 2024

<https://orcid.org/0000-0001-8342-7015>

<https://doi.org/10.18537/iuris.20.01.02>

oscarusal@gmail.com

Resumen

El territorio del Putumayo en la amazonia colombiana es un nodo articulador del proyecto de integración Latinoamericano, entre el oriente colombiano y el sur del continente, entre el Río Amazonas y el océano Pacífico. El reordenamiento del territorio se encuentra en medio de la disputa por la creación de condiciones para la competitividad en el mercado global, la intensificación de la actividad petrolera y el impacto de las economías ilícitas, especialmente la de las rentas del narcotráfico. La asignación exógena del modelo territorial genera efectos perversos en la sociedad, destrucción de las redes sociales existentes y la expansión de diversas formas de violencia.

Abstract

The Putumayo territory in the Colombian Amazon is a node that links the Latin American integration project, between eastern Colombia and the south of the continent, between the Amazon River and the Pacific Ocean. The reorganization of the territory is at the center of the dispute over the creation of conditions for competitiveness in the global market, the intensification of oil activity and the impact of illicit economies, especially those of drug trafficking profits.

¹ INNOVAPAZ- UNIMINUTO

Docente en la Universidad Uniminto-Colombia

The exogenous allocation of the territorially model generates perverse effects on society, destruction of existing social networks and the expansion of various forms of violence.

Palabras Claves: Territorio, narcotráfico, guerra, Putumayo, Amazonas.

Keywords: Territory, drug trafficking, war, Putumayo, Amazonas

Introducción

En los territorios de la Amazonia colombiana se produce una violencia sistemática desde fuerzas externas a las comunidades en la búsqueda de objetivos estratégicos de control o disputa de los excedentes económicos de un territorio, de tal forma que la población es convertida en blanco del uso de fuerza armada para someterla, produciendo muertes y terror en una escala masiva, desarticulando sus modos de vida y promoviendo su migración forzada.

Hay un incremento sostenido de las condiciones de violencia en estos territorios en los últimos años, analizando con particular interés los 4 años transcurridos entre el 2002 a 2005, período de particular agudización del conflicto y que ayuda a comprender lo que pasa hoy, dos décadas después. Putumayo es un departamento colombiano fronterizo con el Ecuador, escenario de una aguda confrontación armada con tres grandes ejes violentos: las fuerzas del Estado, respaldadas por el poderío técnico y militar de los Estados Unidos, que desplegaron al comienzo del siglo XXI dos grandes operaciones estratégicas denominadas “Plan Colombia” y “Plan Patriota” contra la guerrilla y el narcotráfico; la guerrilla de las FARC que tuvo en este territorio parte de su retaguardia estratégica y una larga tradición de presencia y control de la zona, y los grupos paramilitares que se volvieron actores decisivos en el transcurso de la confrontación. El telón de fondo de esta fase de la guerra interna fue la existencia de proyectos económicos de gran envergadura que plantearon la posibilidad de extracción de inmensas riquezas.

Históricamente, el Putumayo, como parte de la Amazonía, fue reconocido porque allí se han realizado las explotaciones caucheras y petroleras durante los dos siglos anteriores, en los que, a lo largo de su historia, la región se convirtió en el objeto de fines extractivistas de recursos energéticos, madereros y cocaleros, en cuya intensificación arrollaron a las comunidades indígenas, depredaron la selva y el río, y desataron múltiples violencias contra las redes sociales y contra distintas formas de vida en el territorio.

Putumayo, en el proceso de reestructuración para su inserción en el libre mercado, emprende un cambio profundo en su misión histórica, que significa el reordenamiento del territorio para adaptarlo a condiciones de competitividad. La forma de distribución de los recursos del territorio transforma la

organización del trabajo y cambia los valores culturales y políticos. La asignación exógena del modelo territorial genera efectos perversos en la sociedad, destrucción de las redes comunitarias existentes y la ampliación del espectro de la guerra que, al igual que en la gran confrontación en la mayoría de los territorios colombianos, multiplicaron las masacres, el despojo y la imposición de órdenes bélicos que transformaron la vida cotidiana de su población y remodelaron el espacio en función de la competitividad mercantil, en un proceso de desarticulación de las formas de organización existentes para establecer una nueva estructuración social.

Tres elementos estratégicos dinamizaron este modelo de desarrollo en el marco del neoliberalismo: infraestructura, comunicaciones y energía, que establecieron las condiciones básicas para su articulación al modelo continental previsto en el diseño del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, e incorpora los megaproyectos coordinados por la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IIRSA. Ellos fueron resumidos por Corpo-Amazonia (2005) así:

1. Fortalecimiento de las Instituciones y la Sociedad Civil
2. Sistemas de Información Ambiental Regional, Investigación y Desarrollo de Tecnologías Apropriadas
3. Re – Ordenación Territorial
4. Infraestructura y Equipamiento
5. Sistemas Productivos Regionales.
6. Fortalecimiento de las Relaciones Intra y Extra-regionales

La violencia reciente en el área del Putumayo ha desarticulado la región y los proyectos políticos que tomaron asiento en su territorio, la descripción y la exploración de sus prospectivas constituyen los elementos dinámicos de su historia reciente. Este texto presenta un examen de la situación del territorio del Putumayo tomando en cuenta algunos hitos, como la expedición de la Constitución de 1991, la apertura de la economía y las políticas de inserción en el libre mercado que involucra ese territorio como un escenario articulador de la amazonia colombiana a la economía mundo.

Este artículo recoge elementos de la investigación que realizamos con el académico Pedro Galindo para la Defensoría del Pueblo de Colombia (Useche y Galindo, 2005). En la primera parte, se establece la panorámica de un desarrollo enunciado desde la guerra, los megaproyectos y el narcotráfico en el departamento del Putumayo, indicando los impactos de los proyectos exógenos. Luego, se tocan

las tendencias del problema del narcotráfico en el Putumayo y su conexión con el mercado global, desde una perspectiva de su historia reciente. Más adelante, se plantea un análisis de las relaciones entre la guerra y las diversas violencias para incorporar una visión sobre la actividad petrolera, y se finaliza con un rastreo al impacto de los cultivos ilícitos y la violencia que produce. Las conclusiones dejan abiertas nuevas preguntas sobre la actualidad de estos problemas.

Putumayo: un desarrollo enunciado desde la guerra, los megaproyectos y el narcotráfico.

Prospectivamente, Putumayo se reordena como una región de oferta de recursos naturales y de servicios, a través de un proceso de reestructuración, cuyo resultado esperado es la integración al proyecto nacional y la red global de libre mercado, en forma sostenible, a partir de la diversidad biológica, étnica, cultural y física.

Al Putumayo le es asignada una función cohesionadora como parte del territorio amazónico, tanto en el terreno internacional, nacional, regional, como local. La constitución de 1991 en sus artículos 80, 333 y 366, establece el sentido del desarrollo y de la globalización de la economía (Sáchica, 1992: 328). Ante lo cual la eliminación de las condiciones de inequidad está determinada por el ritmo del crecimiento de indicadores del mercado y la economía, la integración a la dinámica de internacionalización y globalización. La legitimación del Estado es el punto inicial de la reversión del proceso de un colapso generalizado y la reconstitución de una nueva forma de soberanía, que garantice la sostenibilidad de la región².

Asumir a Putumayo como un proyecto territorial, significa reconocer su realidad como síntesis de las diversidades del territorio que comprende y de sus pobladores, en la posibilidad de su realización individual y colectiva, en el ejercicio autónomo de su libertad, como parte integral de un proyecto nacional y de integración Latinoamérica, y como parte del sistema mundo.

La relación tiempo y espacio, examinada a través de la dinámica de poblamiento, configura un marco general de la formación social del Putumayo para dimensionar sus alcances y las proyecciones de una nueva realidad social, en la perspectiva de avanzar en su comprensión a través del estudio de los elementos estructurales económicos, políticos, sociales y las interrelaciones que construyen el habitar y el significado de la región.

La Amazonia colombiana hace parte de una extensa región que se ha convertido en zona estratégica donde se entrecruzan grandes procesos de desarrollo del mercado internacional -a través de los megaproyectos que avanzan atravesando

2 Áreas supranacionales.... ponen en crisis la noción de Estado, como titular de una soberanía absoluta, cerrado y autosuficiente. Ibidem. Pág. 159.

el territorio-; con los procesos del conflicto armado interno que ha tenido allí uno de los nudos claves de desenvolvimiento en tanto fue escenario de la retaguardia estratégica de las FARC y objetivo del plan Patriota del Ejército colombiano, en la primera década del siglo XXI, y con el conjunto de problemas derivados del cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína.

El Putumayo se cuenta dentro de los territorios que han sido tratados por las élites centrales como una realidad marginal, cuyo conflicto social ha sido caracterizado recurrentemente como un espacio de ilegalidad e ilegitimidad, copado por el accionar de la guerrilla y otras agrupaciones armadas como las organizaciones paramilitares y los ejércitos privados al servicio del narcotráfico que muchas veces se confunden.

La élite del centro del país solo ha puesto atención al territorio cuando coinciden las bonanzas económicas coyunturales, que ocurren en torno de la economía extractiva (caucho, petróleo, coca) para la cual se consideran especializados el Putumayo y la mayoría de los que, antes de la Constitución del 91, se denominaban “territorios nacionales”, o cuando se hacen evidentes los problemas de una zona de colonización y de frontera, una de las fronteras más vivas del país. De ahí que algunos cataloguen la situación del Putumayo como típica de lo que Fernán González (2005) llama “espacios vacíos” para referirse a territorios de frontera, con escasa población, poca presencia de instituciones estatales, e incluso, poca influencia de la autoridad española durante la colonia y débil presencia del clero católico.

En estas condiciones no ha sido posible el surgimiento de una sociedad civil moderna, ni formas de cohesión social eficaces, ni identidades regionales -y menos aún nacionales- generándose una dualidad de poderes frente a actores que intentan construir soberanías paralelas, mientras que el Estado se convierte fácilmente en una fuente más de rentas, y la política y lo público se fragmentan y privatizan.

El Putumayo se convierte entonces en territorio de paso en donde los colonos mantienen los vínculos con sus zonas de origen y se ubican allí para sacar provecho de los recursos naturales, casi siempre a través de recursos informales o no convencionales, como una fuente de acumulación primaria de capital que se piensa invertir en otras regiones o circuitos del capital. Lo central de esta lógica es que requiere de una inversión muy baja (las tierras se usufructúan generalmente mediante la apropiación y explotación de baldíos), con costos de producción mínimos; no hay tributación; y las rentas se reinvierten o gastan principalmente fuera del territorio.

La cultura de la colonización que se difundió en las primeras décadas del siglo XX alrededor del caucho fue de una ferocidad de conquista con el arrasamiento de las comunidades indígenas que habitaban tradicionalmente este territorio selvático. La novela “La Vorágine” (Rivera, 1924) ficcionalizó el genocidio de las

comunidades huitotas que fueron esclavizadas y asesinadas para la explotación del caucho en un repugnante episodio protagonizado por colonos colombianos y peruanos para responder a la demanda de esta materia prima para la nascente industria automovilística de los Estados Unidos.

Pasadas las bonanzas, el Putumayo volvió a su enigmática condición de reserva natural hasta la oleada de colonización promovida por la explotación petrolera en Orito y la Hormiga en la década de los años sesenta. Si a esto se agrega la presión demográfica proveniente de un problema agrario no resuelto en el interior del país, puede explicarse las tendencias crecientes de poblamiento de la región.

Al comenzar la década de los ochenta se extendió el fenómeno del narcotráfico, pasando rápidamente el Putumayo de ser un territorio de procesamiento de pasta de coca a partir de la hoja proveniente de Perú, Bolivia y Ecuador, a ser un territorio de cultivo de la coca, de producción de la pasta básica y de procesamiento del clorhidrato de cocaína.

Las guerrillas ya habían incursionado en el Putumayo, o bien como acompañamiento para-estatal de las migraciones colonizadoras (es el caso del EPL), o como zona de abastecimiento de armas y uso del territorio para la consolidación de una plataforma de guerra (caso del M19), o como zona estratégica para la consolidación de un poder territorial (caso de las FARC).

El paramilitarismo también llegó temprano al Putumayo. En los ochenta los “masetos” cuidaban los cultivos de coca y laboratorios de procesamiento de propiedad del mexicano y en los 90, primero las AUC y luego el Bloque Central Bolívar, extendieron un enorme control de los centros urbanos de los municipios del “bajo Putumayo” (Rivera, 2003).

En este capítulo se abordará el análisis estructural del riesgo que se deriva de la confluencia de estos factores de ilegalidad y violencia, al lado de las grandes corrientes del mercado nacional, latinoamericano y transnacional que lo afectan y, en particular, el impacto sobre la constitución de las élites locales.

Tendencias del problema del narcotráfico en el Putumayo y su conexión con el mercado global.

El cultivo de la hoja de coca para uso ilegal es un factor determinante en los flujos migratorios de población desde la década de los setenta y en la transformación de la vocación y del panorama económico del Putumayo, que había ido tomando hasta entonces el perfil de un territorio petrolero. Esto por cuanto la implantación de la coca como cultivo dominante imprime unas dinámicas de las cuales no es fácil a los habitantes del departamento situarse al margen.

Muchos colonos que llegaban con ánimo de cultivar la tierra con productos lícitos, de integrarse al precario mercado local o regional, pronto sucumbían ante

una realidad económica de enormes dificultades para los mercados campesinos tradicionales, mientras que la economía cocalera ofrecía márgenes de rentabilidad que no podían igualar otros cultivos, y en donde los empresarios mafiosos suministraban crédito, asistencia técnica y comercialización asegurada, independientemente de lo aislada que estuviera la finca donde se cultivaba.

Dice la investigadora María Clemencia Ramírez (2001):

El cultivo de la coca en el Putumayo comenzó en 1978. La primera variedad, sembrada cerca de los ríos Caquetá, San Miguel, Guamués y Putumayo, fue la caucana. Durante los cinco años siguientes, la producción se incrementó; en ese período, las parcelas de coca se encontraban en zonas de selva profunda bien protegidas, en especial en las áreas del Putumayo en donde no existían programas de colonización estatal. Esos territorios eran parte de la reserva forestal de la amazonia y, en cuanto tales, no podían pertenecer legalmente a los colonos, quienes como resultado no podían ser beneficiarios de préstamos bancarios (Ramírez R.1998: 98). En consecuencia, estos se endeudaron con los narcotraficantes, que les suministraban las semillas para sembrar y los químicos para transformar las hojas en pasta de coca. Los narcotraficantes también compraban el producto final, usualmente a cambio de bienes como comida y ropa. (p. 72)

Además, factores de orden político, como el impacto de las medidas para combatir el narcotráfico, o la agudización de la confrontación entre las mafias y el Estado, movilizaban recursos de las primeras en busca de refugio en los territorios más apartados y con menor presencia institucional y, alteraban los precios en el mercado de la coca.

María C. Ramírez (2001) describe esta situación así:

En 1987 como resultado de la persecución emprendida por la policía antinarcóticos en el Magdalena medio en contra del cartel de Medellín, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los jefes de ese grupo, escogió al Putumayo para continuar su próspero negocio; en esa ocasión incluyó además el entrenamiento de paramilitares en la zona. (Comisión Andina de Juristas, 1993:29). El área extensa de cultivo de coca que implantó, conocida como El Azul, estaba localizada cerca de la frontera con Ecuador; allí también construyeron laboratorios que producían una tonelada de cocaína por semana y dos pistas de aterrizaje para recibir pasta de coca del Perú. (p. 73)

Guerra, paramilitarismo y coca

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas (WDR, 2024) el cultivo mundial del arbusto de coca aumentó 12% entre 2021 y 2022, hasta alcanzar las 355.000 hectáreas; de ellas 253.000 hectáreas están en territorio colombiano. Según la misma fuente, la producción potencial de cocaína continúa en sus récords

históricos, alcanzando las 2.757 toneladas métricas, con un incremento del 20% en el año 2023 frente al año anterior.

Las vicisitudes de un negocio signado por la prohibición, manejado por empresarios mafiosos, perseguido por gobiernos extranjeros, lo ata inevitablemente a la violencia y lo somete a los sobresaltos de una economía de bonanza cuyos determinantes económicos son decididos en otros eslabones de la cadena de producción. No obstante, el incremento permanente de la demanda ha regularizado el mercado, impidiendo caídas súbitas y permanentes de los precios de la coca, manteniéndose una relativa estabilidad que a la vez se refleja en sostener las dinámicas migratorias hacia los territorios cocaleros.

La magnitud del problema ya era enorme hace dos décadas. Según el informe de la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas de 2005, el mercado mundial de drogas ilícitas tenía un valor aproximado de 322 billones de dólares, lo cual representaba el producto interno bruto del 88% de las naciones existentes, y era cuatro veces mayor que el total de las exportaciones de productos agrícolas de América Latina. En términos de oferta, el mercado mundial de las drogas ilícitas tenía entonces un valor similar al del total de las exportaciones mundiales de cereales y carne.

El mercado mundial de cocaína llegaba a un valor aproximado de 71 billones de dólares. Los mayores productores eran Colombia, que daba cuenta de más o menos el 50% (hoy se ha incrementado su participación), Perú del 32% y Bolivia del 15%. De estos tres países, Colombia es el mayor productor de hoja de coca y el mayor productor de clorhidrato de cocaína desde 1997. De las más de 680 toneladas de pasta de coca que potencialmente producían estas tres naciones, Colombia aportaba más de 390.

Según el Departamento de Estado USA, el 70% de la coca es producida en Colombia y se procesa el 90% de la cocaína, pero solo se incauta el 30%. Para Naciones Unidas, Colombia tenía, en el año 2005, 86 mil hectáreas sembradas de coca que producirían 440 toneladas de cocaína por un valor de 350 millones de dólares. Hoy en día el área sembrada supera las 253.000 hectáreas, de las cuales en el Putumayo se concentran 53.648 hectáreas. De esta manera, en los últimos 20 años, a pesar de la guerra contra las drogas dirigida por los Estados Unidos y de toneladas de glifosato regadas sobre los territorios, así como de la mezcla del narcotráfico con la guerra interna que vive el país desde hace 60 años, enturbian- do las posibilidades de paz, el problema de los cultivos de coca se ha agravado.

Igualmente, como señala el informe de la UNODC del 2024 En 2023, Colombia produjo 2.664 toneladas de cocaína, lo que representa un incremento de más de 900 toneladas en comparación con la producción del año anterior. Esta cifra también marca un aumento de 818,6% respecto al volumen producido hace apenas una década. Tampoco sirvió la costosa y brutal guerra contra las drogas para resolver esta cuestión. Mientras la demanda vaya en ascenso y los márgenes

de ganancia sean abismales, no se resolverá nada con una política represiva y en detrimento de la soberanía de Colombia. Obsérvese que actualmente un kilo de cocaína en la zona de producción vale 2.000 dólares, pero el precio en puerto de salida se incrementa a 4.000. Una vez llega a Miami en EE.UU. la droga vale 20.000 dólares por kilo; en Nueva York está en 25.000 y en Europa el precio puede llegar a 35.000 dólares.

La cadena de producción y distribución beneficia a las redes mafiosas, a los productores de insumos y al sistema financiero ubicados principalmente en el exterior del territorio colombiano, mientras que el eslabón más débil es el de los campesinos productores de la hoja de coca que, sin embargo, son los que más rigores deben afrontar por la represión estatal y el sometimiento al dominio y la extorsión de grupos criminales.

Figuras como la extradición y los golpes dados a los carteles colombianos de Medellín, Cali y el Norte del Valle a principios de los años 90, así como las grandes operaciones norteamericanas en alianza con los gobiernos colombianos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (1998-2010) no han impedido el liderazgo de las mafias colombianas en los distintos nodos de la cadena productiva de la cocaína, ni la devastación ambiental de los territorios, ni la proliferación de bandas armadas y de organizaciones criminales estructuradas que han tomado como blanco principal a los dirigentes comunitarios que defienden su territorio.

El escenario del mercado de las drogas ilícitas en Colombia y su contexto internacional ha tenido mutaciones que lo hacen diferente al de hace apenas 10 años. Los grupos armados, post paramilitares y post FARC, controlan una porción sustancial del negocio en Colombia y los tradicionales carteles de la mafia narcotraficante quedaron englobados de diferentes maneras dentro de las dinámicas del conflicto armado, asociándose unas veces o participando directamente del experimento paramilitar, o siendo sometidos a presiones, cobros de tasas, acuerdos coyunturales o acciones militares para desalojarlos de territorios por parte de las guerrillas y los grupos que sucedieron a las FARC.

Mientras que los grupos paramilitares tuvieron mayor influencia en aspectos relacionados con el procesamiento, el control del mercado de los insumos, las rutas de exportación y el lavado de dinero, las FARC, que llegaron a ser la mayor guerrilla de América Latina, tuvieron mayor incidencia en los aspectos relacionados con el cultivo y producción de pasta de coca, eslabón de la cadena que, sin embargo, nunca dejó de ser disputado con gran violencia por los paramilitares, así como por el poder que se deriva del control de territorios, incluidos los aeropuertos clandestinos y su influencia sobre la mano de obra directa en la producción de la pasta básica.

En el escenario económico, el sostenimiento o incremento de los precios de la cocaína en el mercado internacional y la especialización de los agentes económicos en eslabones específicos de la cadena han asegurado a los narcotraficantes colombianos un flujo de ingresos inmenso. Muchos de los narcotraficantes han

aprendido a establecer una parte de esos ingresos en el exterior; pero la fracción más sustanciosa sigue ingresando a Colombia, alterando el mercado cambiario con un dólar revaluado y registrando cambios en las formas de inversión. En efecto, mientras que en los primeros años de la bonanza los empresarios mafiosos se dedicaron al consumo suntuario y a la especulación inmobiliaria (disparando de paso artificialmente el precio de la tierra y de la vivienda) y buscaron copar actividades ilícitas como el contrabando o la participación en las redes de tráfico de armas, tráfico de personas, prostitución, juego y demás, que les permitía ampliar su predominio en el mundo de la delincuencia, hoy copan nuevas áreas de producción como la minería ilegal o privilegian la inversión en empresas lícitas y en la búsqueda de acceso a los círculos de la élite tradicional que les haga posible la legalización de sus fortunas y el lavado de sus ingresos, así como mayor incidencia directa en la política de representación.

Pero así mismo se registran cambios en la política de lucha contra las drogas, puesto que en las décadas pasadas se hizo énfasis en la interdicción de los cargamentos de droga y el desmantelamiento de las estructuras criminales, implementando para ello mecanismos como la extradición y conformando estructuras especializadas del ejército y la policía (bloques de búsqueda) para perseguir a los capos más emblemáticos, sin descartar alianzas poco santas con narcotraficantes rivales. Sobre este último aspecto recuérdese el caso de los “Pepes”- “Perseguidos por Pablo Escobar” -que trabajaron mancomunadamente con la Agencia Antidrogas Norteamericana y con mandos policiales colombianos, dando como resultado no solo la muerte del capo y la destrucción de su organización sino el fortalecimiento de estructuras mafiosas emergentes que aprovecharían esta experiencia para la etapa de expansión de los paramilitares.

En esto coinciden numerosos analistas. Solo a manera de ejemplo, así lo reseña Gustavo Duncan (2006):

Ante la amenaza que suponía el líder del cartel de Medellín, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) no reparó en que la policía y el ejército colombiano aceptaran la ayuda de reconocidos narcotraficantes y criminales para dar de baja a Escobar, tal como ha quedado revelado en informes de inteligencia desclasificados... Aunque la guerra de los Pepes contra Pablo Escobar se libró en mayor parte en ámbitos urbanos, su experiencia sería fundamental para la consolidación de los ejércitos privados en las periferias rurales del país. (p. 274)

Las permanentes sacudidas en la política pública antidrogas eran el resultado de la presión norteamericana y de las negociaciones entre las élites gobernantes y sectores del narcotráfico. La prohibición de la extradición en la Constitución del 91, las negociaciones con Pablo Escobar durante el gobierno de César Gaviria, el aprovechamiento de las confrontaciones al interior de las organizaciones mafiosas y la incorporación de una parte de ellas a la lucha contra los capos más desafiantes, así como la creciente penetración de la economía y la política tradicionales, son fenómenos que van haciendo más complejas las relaciones entre

las políticas públicas para combatir el negocio, la injerencia estadounidense, la recomposición de los grupos mafiosos y la articulación con las distintas manifestaciones del conflicto armado.

A partir de la década de los ochenta, Colombia asiste al surgimiento de una fracción de clase emergente, de estirpe mafiosa, una especie de “lumpen-burguesía” con inmenso poder económico y con urgencia de irrumpir en la política para intentar diseñar su escenario de afirmación y reproducción. Su rápida consolidación en la forma de carteles no consiguió hacerse hegemónica ni conquistar el lugar de legitimidad y reconocimiento que pretendió prematuramente. La derrota de la estructura de carteles, a la manera de organizaciones empresariales oligopólicas militarizadas que controlaban el conjunto del proceso de producción y comercialización, en condiciones de ilegalidad y de ruptura de varios órdenes existentes, no fue, ni mucho menos la derrota del narcotráfico.

El oligopolio es aquella situación del mercado en la cual un producto es suministrado por un pequeño número de empresas cuyas actividades y políticas están influidas por las reacciones esperadas de las otras empresas. En el caso del negocio del narcotráfico podría decirse que la estructura de carteles llegó a configurar temporalmente un caso de “duopolio” en donde los grupos de Medellín y Cali cambiaron su situación de colaboración o subordinación inicial, por el de guerra abierta, tanto por los mercados como por el control total del negocio, generando una situación de incertidumbre que finalmente se resolvió por la vía militar.

El negocio dio paso a una fragmentación de las estructuras relativamente centralizadas del tráfico para proceder a una expansión de redes lideradas por personajes, generalmente antiguos lugartenientes de los carteles desmantelados, que aprendieron la lección para no incurrir en una sobreexposición mediática y para, en lugar de mantenerse en una situación de desafío ante el Estado, optar por su mimesis, o por la infiltración de diversas instituciones y entidades. Quienes marcaron el paso en esto fueron los hermanos Rodríguez Orejuela (cartel de Cali), aunque ellos no consiguieron transformar su forma de operar a formas de organización reticular, por lo que no pudieron reconvertir sus empresas mafiosas oportunamente.

Pero, además, las nuevas generaciones de narcotraficantes optaron por un repliegue de la visibilización urbana del fenómeno, lo que creó una percepción de que las ciudades habían sido recuperadas para la institucionalidad, sin que el Estado avocara el fenómeno de “pandillización” y “traquetización” de las comunas de las ciudades ni tampoco presentara alternativas para resolver el ascendente nivel de difusión de las formas rurales del negocio.

Guerrillas y paramilitarismo en el conflicto en Putumayo y su relación con el narcotráfico y las estrategias del Estado.

La experiencia que, en particular en Caquetá y el Putumayo así como en el Magdalena Medio, habían adquirido los narcotraficantes en la constitución de grupos de protección armada a los grandes centros de procesamiento de cocaína, fue desplegándose por todo el territorio mezclándose con rasgos de la lucha contra-insurgente del Estado- que ya desde la década de los sesenta había contemplado la posibilidad de conformar grupos de autodefensa- y que, en los años 90 les entregaría patente legal a través de formas como las cooperativas de seguridad "Convivir", luego desmontadas e ilegalizadas.

Los intereses de grandes latifundistas, ganaderos, políticos y sectores del Estado, así como de algunos sectores medios del campesinado asfixiados por las presiones de las guerrillas, confluyeron con los de estos emergentes armados, produciéndose un fenómeno de expansión del paramilitarismo que fue, en últimas, la forma que tomaron los ejércitos privados del narcotráfico en todo el país para consolidar sus territorios de producción y sus redes de distribución y para enfrentar a las guerrillas o dominar a otros empresarios y sectores de la sociedad que se les pudieran enfrentar.

Esta expansión implicó cambios de fondo en la estrategia cuyo centro fue el paso de ser principalmente grupos de sicarios que operaban a la manera de bandas para el control urbano del negocio de la droga, o como unidades de protección de los capos, o como escuadrones de la muerte para afianzar territorios de producción y procesamiento, para constituir paulatinamente un proyecto político y militar de corte mafioso con capacidad de competir por la influencia política y el control territorial estable en amplias regiones del país, a partir del dominio y la apropiación de los principales excedentes del narcotráfico y luego de la regulación del excedente del conjunto de las actividades ilegales y su posicionamiento en las actividades legales.

Por otra parte, las FARC también aprovecharon sus ventajas estratégicas de control territorial en zonas en donde la producción de alucinógenos había sido controlada por los anteriores carteles, consolidando su dominio sobre importantes zonas de producción cocalera. Las finanzas de las FARC se multiplicaron a raíz de su participación en el negocio, usando buena parte de este balance económico ampliamente positivo en la modernización de su armamento y su logística, desplazando en casi todo el país a los demás grupos insurgentes que no entraron decididamente en esta lógica de acumulación de fuerzas.

Con esta base económica y en medio de la disputa entre los actores del conflicto que fueron copando o reordenando el negocio del narcotráfico, la contienda se traslada al recientemente configurado espacio del poder local y de fortalecimiento del papel de las instituciones municipales y departamentales, a raíz de las

reformas de 1986, luego ampliadas en la Constitución de 1991, en donde encontraron nichos para la ampliación de su dominación sobre distintos ámbitos de la vida de la población y para la reproducción política de sus estructuras.

En efecto, la descentralización administrativa propició el alumbramiento de actores políticos locales que escogieron el camino de las microempresas electorales, erosionando las lealtades por mucho tiempo vigentes hacia los grandes barones de los partidos tradicionales, quienes paulatinamente fueron reemplazados por una nueva generación de políticos con base en caudas electorales clientelistas pequeñas pero propias, desde donde adquirieron la capacidad no solo de manejar los recursos municipales y departamentales, puestos ahora al servicio de su reproducción política, sino de influir en los escenarios nacionales. La ausencia de partidos políticos modernos y la fragmentación de la gestión política fueron el caldo de cultivo en donde muy rápidamente se labraría el escenario de la para-política que hoy domina el país, pues en las condiciones reseñadas propulsó la mediación de los grupos armados ilegales en el quehacer político local.

Esto coincide con una reingeniería de la política contra el narcotráfico impulsada desde los Estados Unidos, sustentada en la erradicación de cultivos y la asociación de la lucha antinarcóticos con la lucha contra el terrorismo, dejando como asuntos subsidiarios la interdicción marítima y aérea y la persecución individualizada de los jefes de los carteles; con esta lógica se diseña e implementa el Plan Colombia que se centra en el combate militar de los factores que se perciben como alimentadores de la insurgencia y del terrorismo.

El Estado colombiano emprendió esta fase de la lucha contrainsurgente y antinarcóticos como una operación de recuperación de territorios y de afirmación de la soberanía y de la presencia estatal para garantizar no solo zonas libres de coca y de grupos armados irregulares, sino zonas habilitadas para las grandes estrategias globales de mercado libre (ALCA, TLC, Plan Puebla- Panamá), para los megaproyectos de interconectividad vial y de comunicaciones latinoamericana y para garantizar los proyectos energéticos y de explotación de la biomasa en estos territorios.

Las operaciones masivas de fumigación aérea acompañaron las operaciones militares contra la retaguardia de las FARC, conocidas como “Plan Patriota” en un despliegue de fuerzas sin antecedentes en las selvas del Sur de Colombia, y que tuvieron como centro la amazonia occidental (Caquetá y Putumayo y Guaviare). Por su parte, el componente social del plan Colombia -porción minoritaria pero significativa de la estrategia- contemplaba el apoyo a la sustitución de cultivos, el impulso a microempresas y la promoción de actividades de indígenas y campesinos en la esfera del medio ambiente, entre ellas, quizás la más promocionada, la de familias guardabosques.

Existen evaluaciones muy críticas de los resultados de estas políticas; la aspersión aérea no redujo drásticamente el área total de cultivos, ni mucho menos la

producción de pasta básica y de cocaína. En cambio, la disciplina en asumir como principal vía la erradicación por fumigación incrementó el malestar de las poblaciones de estos territorios, por las consecuencias ambientales y sociales altamente perniciosas. Incluso se desataron controversias diplomáticas con los países vecinos que sufrían los efectos de la fumigación en las fronteras y del desplazamiento creciente de campesinos colombianos hacia sus empobrecidos territorios.

Los mercados internacionales en cambio no sufrieron desabastecimiento y los precios de la cocaína al consumidor norteamericano no incidieron, vía precios, en la decisión de reducir consumos. La demanda no se ha contraído y hay suficiente oferta para cubrirla a precios relativamente estables.

Tampoco cambió la situación estratégica en la confrontación con las FARC. Aunque se obligó a un repliegue de la guerrilla, no se menguó significativamente su capacidad operativa, la estructura de dirección se mantuvo intacta por un largo período y no se rompió su abastecimiento de armas y equipos, ni se debilitó de manera crítica su financiación. Los factores que llevaron a esta guerrilla a culminar un accidentado proceso de negociación que finalizó en 2016 tuvieron que ver mayormente con la presión creciente de las comunidades de los territorios en los que tenían influencia, con el auge del movimiento ciudadano por la paz en los centros urbanos y con cambios en la estrategia del ejército que consiguieron vulnerar la seguridad del Secretariado y del Estado Mayor guerrillero.

Entre tanto el poder de las redes de narcotraficantes fue siendo cobijada por esa especie de confederación paramilitar en la cual se convirtieron las AUC y en la cual fueron tomando mayor protagonismo los capos que nunca se plantearon confrontar a la guerrilla, sino que ampliaron sus grupos sicariales a la manera de grupos de seguridad para sus operaciones y como formas típicamente mafiosas de hacer valer su poder territorial en el mercado de la droga. La idea, atribuida a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, de concentrar en las AUC un gran poder de negociación con el Estado colombiano y con el gobierno norteamericano para legalizar los capitales espurios y evitar las sanciones penales, muy particularmente la extradición, se fue traduciendo en la inclusión de muchos de los principales narcotraficantes en la estructura paramilitar.

Esto implicó un reordenamiento de los territorios de la droga que se expresó en guerras internas como la que vivió Medellín en donde las bandas de sicarios de alias don Berna sometieron a sangre y fuego a los grupos del llamado Bloque Metro, estableciendo un férreo control desde la llamada “oficina” de Envigado que disciplinó el grueso de las bandas y pandillas no solo dedicadas al narcotráfico, sino a diversas actividades criminales en la ciudad, reduciendo gran parte de la violencia inorgánica a formas más claras de violencia instrumental con una racionalidad empresarial y contrainsurgente, confundidas en la estructura del llamado Bloque Cacique Nutibara. Algo similar ocurrió entre las fuerzas narcotraficantes y paramilitares del suroriente colombiano en donde la unidad de propósito y de

mando se da a través de la eliminación física de Miguel Arroyave y la subordinación del Bloque Centauros. En otros casos se establecen treguas como la que se pacta entre los grupos de Jorge 40 y Hernán Giraldo en la costa Caribe.

Así mismo se produce la incorporación de grupos de importantes narcotraficantes locales mediante el procedimiento de “venta de franquicias” paramilitares. De esta manera los llamados “narcotraficantes puros”, es decir quienes nunca se habían involucrado directamente en formas de lucha contrainsurgente, sino que estaban dedicados exclusivamente a su negocio, resultaron con rangos militares y presentando sus estructuras sicariales como organizaciones en armas contra la guerrilla. Nombres como “Macaco”, “Gordo Lindo”, “los Mellizos”, “el Tuso” y otras decenas, que hasta entonces solo eran conocidos en los expedientes de las unidades especializadas antinarcóticos de la Fiscalía y en los requerimientos de extradición de la DEA, comenzaron a aparecer como comandantes paramilitares, dirigentes de una causa política contrainsurgente.

Los nuevos comandantes entendieron pronto la lógica que habían implantado en las AUC Carlos Castaño, “Rodrigo Doble Cero”, el “alemán” y otros que lograron ciertos grados de autonomía de los ganaderos, grandes capos urbanos y oficiales militares y policiales a quienes en principio estuvieron subordinados. Ahora, la consolidación de una fuerza numerosa, bien armada, con financiación ilimitada, relativamente disciplinada, que había aprendido a invertir en el control de los negocios y de la política locales empezaba a operar en sentido contrario y a subordinar a los ganaderos, a los capos urbanos, a los políticos regionales y a no pocos nacionales, así como a los sectores de la oficialidad de las Fuerzas Armadas que habían jugado la apuesta del paramilitarismo como su carta fuerte contra insurgente.

Toda esta operación de reorganización y reordenamiento del mundo del narcotráfico y del paramilitarismo hace parte de los movimientos que condujeron a las negociaciones tendientes a la desmovilización de las AUC, iniciadas con el gobierno nacional en el año 2003, que plantearon graves problemas de credibilidad en cuanto a la certeza de que este fuese el camino para la desactivación del fenómeno y un reto jurídico sin precedentes para un Estado que debía superar la confusión y entrecruzamiento entre una negociación política con sediciosos y la expectativa de un acuerdo que debe resolver el tipo de judicialización para las actividades mafiosas.

Uno de los principales efectos que tuvieron los diálogos y los procesos de desmovilización fue que el gobierno nacional (en ese momento era presidente Álvaro Uribe) aceptara que se estaba ante el primer proceso de negociación masiva entre un Estado legítimo y la mafia organizada y que no implicaba un sometimiento a la justicia, sino una negociación sobre las condiciones jurídicas y el estatus legal que en adelante tendrían los miembros de organizaciones criminales cuya primera motivación para delinquir es su propio enriquecimiento y beneficio privado, en aras de los cuales cometieron toda clase de atrocidades contra la población. El

significado de esto fue el estatus político que por primera vez alcanzaban organizaciones violentas que únicamente buscaban el lucro propio.

Es necesario entonces profundizar sobre la relación entre la guerra colombiana y el entorno propicio para que paramilitares y guerrillas hubiesen podido conquistar el negocio del narcotráfico y cómo incide en ello el desarrollo de su capacidad de regular el acceso a las instituciones del Estado, de controlar las estructuras clientelistas locales y sus prácticas sistemáticas de ejercicio de la violencia³.

Gustavo Duncan cree que fueron esas fortalezas las que les permitieron posteriormente hacerse al grueso del botín del narcotráfico. Y esas fortalezas no eran necesariamente ejercidas directamente por las estructuras regulares de estos grupos, sino por unos terceros al servicio de éstos que el investigador Mauricio Romero (2003) denominó los «empresarios de la coerción». Duncan destaca que los distintos actores del conflicto que estuvieron y aún están vinculados al narcotráfico cuentan con contactos políticos, capital, inmunidad y capacidad militar, aunque tienen grandes diferencias en su forma de vincularse a este.

Al final, la inserción en el narcotráfico de estos grupos alzados en armas lo que consiguió fue alterar la racionalidad de la guerra insurgente, de la violencia contrainsurgente y del orden histórico del Estado y la economía colombiana, generando un orden más violento que el tradicional. El acceso a los capitales de la droga ofreció mayores oportunidades de movilidad y ascenso a los estratos bajos de la población que se involucró y, de alguna manera, desató un nuevo orden económico en las regiones que controlaron, que se tradujo en ingresos, reconocimiento y oportunidades de acceder a bienes que las comunidades, en condiciones normales, tendrían mucho más lejos. Este es un factor de legitimación que persiste en sectores de la población, ante el abandono del Estado y la imposibilidad de movilidad social por otras vías.

Por supuesto que la inserción y el papel de las guerrillas y los paramilitares difirieron en los fines, las estrategias y los lugares de la cadena del narcotráfico que controlan. Las FARC llegan al narcotráfico luego de una larga experiencia como guerrilla campesina y actuaron no como un mero cartel como pretendieron simplificarlo algunas autoridades norteamericanas y nacionales; sostuvieron un discurso de naturaleza netamente política como es el de tomar el poder nacional para implementar transformaciones estructurales; sus estructuras, sus formas de operar y su relación con la población mantuvieron un alto grado de determinación en vistas de estos objetivos y de esta historia. Algunas de sus estructuras se adaptaron para intervenir en el negocio el cual concebían como otra forma de hacer la guerra, encontrando en el narcotráfico un poderoso medio

3 Ver el desarrollo de esta argumentación en Gustavo Duncan, "Narcotraficantes, mafiosos, y guerreros, historia de una subordinación" y en "Los Señores de la Guerra" - particularmente el capítulo 11 "Las autodefensas verdaderos señores de la guerra", op.citp. páginas 294- 332.

de financiación para ello. Aunque la corrupción personal de los mandos se incrementó, en lo fundamental la guerrilla reinvertió las ganancias de esta actividad en su aparato de guerra: reclutando hombres y adquiriendo armamento, antes que en incrementar el beneficio personal o el capital privado de sus dirigentes. La guerrilla tendió a ejercer mayor control sobre las fases de cultivo de hoja y producción de pasta y base de coca, lo que era coincidente con el hecho de que las regiones bajo su control o influencia eran predominantemente regiones de la periferia, en el entorno de sus retaguardias militares aisladas, atrasadas y sin desarrollos económicos importantes.

No se puede decir lo mismo de los grupos que se dicen sucesores o disidentes de las FARC (“Estado Mayor central”, “Nueva Marquetalia” o “Ejército bolivariano”) cuya principal atención es la disputa de los territorios y corredores de la cocaína, de la minería ilegal o del tráfico de personas, subordinando completamente el discurso político.

Al respecto de los grupos paramilitares es pertinente recoger la opinión de Duncan (2006) en el sentido de que se originaron en el narcotráfico y su fin no era otro que enriquecerse para invertir en negocios lícitos, controlando economías locales. Su interés por tener presencia en las grandes ciudades se relacionaba con la necesidad de lavar sus ganancias en proyectos legales. Desde otras aristas, el control paramilitar de ciertos territorios hacía parte de su estrategia de seguridad y la dinámica misma del negocio del narcotráfico, despojada de un interés por constituirse en una fuerza política. Los herederos del paramilitarismo (“Clan del Golfo”, “los Pachenca” y otros de esta misma estirpe) son “narcos puros” con inmensa capacidad de intimidación y vocación de dominio territorial, por lo que cíclicamente hablarán de participar en diálogos con el Estado, asumiendo entonces una cierta faceta de políticos negociadores que es bastante incierta.

Conclusiones

Es necesario ahondar en las consecuencias que, para el conjunto de la economía colombiana, y especialmente para las economías locales y regionales tienen las actividades del narcotráfico. Como explica el investigador Ricardo Rocha (2005), esta actividad tiene la particularidad de desarrollarse en dos escenarios económicos segmentados: uno de una economía atrasada y otro de una economía relativamente desarrollada. Parte de las actividades del narcotráfico se dan en el contexto de esa economía atrasada como el cultivo y la producción de pasta de coca, y otras se dan en el contexto de una economía desarrollada como el refinamiento de clorhidrato de cocaína, la comercialización y el lavado. Ambos contextos son muy favorables en Colombia para el tipo de actividades que demanda el negocio del narcotráfico en sus diferentes facetas.

En los medios académicos pervive el debate acerca de la magnitud del impacto directo de la economía del narcotráfico; para algunos economistas este no parece ser tan pronunciado. Una proporción de 2 puntos del PIB no parece ser exagerada, sin embargo, investigadores como Rocha estimaban que la coca producida en Colombia representaba apenas el 0,5% del PIB a precio en puerto y los ingresos percibidos por las organizaciones criminales en Colombia no llegaban al 0,8% del PIB. Hay consenso en cambio, de que la narcoeconomía afecta la tasa de cambio, favorece la evasión fiscal por el contrabando, fomenta la fuga de capitales, pero sobre todo promueve el desarrollo de un sistema económico paralelo al legal, alterándolo, imbricándose con él y distorsionando todas sus regulaciones.

Algo similar ocurre con su capacidad de penetración en toda suerte de instituciones del Estado y el condicionamiento de los procesos electorales para elegir candidatos afectos y rechazar adversarios; esto les ha provisto de una gran influencia política en todos los niveles de las decisiones públicas, compitiendo además por capturar las rentas del Estado incentivando la corrupción.

La experiencia de las negociaciones del Estado con los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe dejó abiertos interrogantes muy graves acerca de si ellas podían conducir realmente a la desarticulación del paramilitarismo, o si, por el contrario, se promovía la desmovilización de sus estructuras militares, dejando intactas sus estructuras criminales y mafiosas. La actualidad de los llamados herederos del paramilitarismo parecería demostrarlo. Si bien las estructuras militares son las más visibles y más fáciles de desmovilizar, no ocurre lo mismo con las otras estructuras, como las redes de vigilantes civiles, los escuadrones de la muerte y las estructuras mafiosas encargadas de mantener el negocio del narcotráfico, así como las responsables de sustraer rentas de manera violenta a la economía formal. Además, en Colombia no es difícil armar pequeños ejércitos que asimilan la experiencia de sus antecesores.

Si se conserva su capacidad de intimidación y control sobre las economías locales, las instancias de representación y las autoridades de distintos niveles, está en juego todo su proyecto político y los reajustes de las estructuras tenderían a legalizar sus capitales, legitimar su participación abierta en los asuntos públicos, reservándose una especialización de sus estructuras armadas, dedicando unas a garantizar la seguridad privada de sus personas y bienes y otras como formas de contención contra el latente peligro insurgente. Estas últimas serían las que se articulan a la contribución del control territorial en las zonas de los megaproyectos que son los nichos de los nuevos mercados legales e ilegales. Los llamados grupos emergentes del paramilitarismo ya pueden contar con más de 5.000 hombres que ratifican estas estrategias.

Si además no se logra avanzar en despojar a estos capitales emergentes de sus vínculos con el narcotráfico y se reciclan sus lazos con el negocio, si la impunidad total cobija sus delitos y crímenes y si se mantienen intactas las fortunas

que son la base de su poder, entonces podrán mantener activas y actuantes estructuras mercenarias para desarrollar actividades criminales a gran escala. En esta medida el proceso perdería toda legitimidad y se mantendrían las circunstancias propicias para que la violencia defina la soberanía en muchas zonas aparentemente pacificadas.

De otra parte, los pactos de paz con la guerrilla de las FARC han mostrado sus virtudes al desmovilizar una fuerza letal de más de 20.000 hombres en armas, pero también todos los vacíos y obstáculos para una paz integral. Muchos de los principales puntos del acuerdo del 2016 no se han cumplido; han sido asesinados miles de excombatientes y la presencia del proyecto político “Comunes” creado por los excombatientes ha tenido una pobre acogida entre la población. Apenas durante el gobierno de Gustavo Petro iniciado en el 2022 arrancó el cumplimiento del principal punto del acuerdo: la reforma rural integral, aunque su camino ha estado lleno de inconvenientes por la fuerza política que los sectores opositores a la paz mantienen en el Congreso y las altas Cortes.

Es de esperar que la sociedad colombiana aprenda de tantos años de guerra y de los innumerables esfuerzos por llegar a una paz integral, justa y democrática. Territorios como el Putumayo siguen esperando y con muchos sectores sociales movilizados para contribuir a ello.

Referencias bibliográficas

- Duncan, G. (2006). *Los señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia*. Editorial Planeta Colombina.
- González, F. (2005) “Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana” en Renán Silva “Territorios, regiones, sociedades”. Citado por Guillermo Rivera. “Los desafíos del Estado en el Putumayo”. *Revista Foro*, (55), 79-87.
- Ramírez, M. (2001). *Entre el Estado y la Guerrilla. Identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Colciencias.
- Romero, M. (2003). *Paramilitares y autodefensas. 1982-2003*. IEPRI. Planeta.
- Rocha, R. (2005). *Sobre las magnitudes del narcotráfico*. IEPRI.
- Sáchica, L. (1992). *Nuevo Constitucionalismo Colombiano*. TEMIS.
- Useche-Aldana, O. (2019). *Ciudadanías en resistencia*. Uniminuto.